

Capítulo Quinto

**Bellotas y cerdos, guardias civiles y
caciques de Extremadura**

«Robo, crimen, linchamiento, contrabando, suicidio, torería (...) ¿Es esto el progreso, hijos de Extremadura? (...) Sólo observamos y hacemos constar la observación que brindamos a todos aquellos para quienes es deber ineludible enderezar esta clase de entuertos, que tanto nos perjudica incluyéndonos en el capítulo más odioso de la maldita 'leyenda negra'»¹.

Badajoz, y Extremadura, no tenían buena prensa en Madrid. No se mostraba ningún interés por las dos provincias en la frontera con Portugal; no había mucho de lo que se quisiera tomar nota. En todo caso, «el crimen de Don Benito» suscitaba un escándalo nacional. Por lo demás, los titulares de prensa resumían las opiniones al uso sobre la región en los siguientes términos: «bellotas y cerdos, guardias civiles y caciques de Extremadura»². También el presente libro parte de temas estereotipados como la delincuencia rural. Esos temas han sido puestos en relación con la estructura y el desarrollo de una región española de economía latifundista; desde esta perspectiva queríamos lograr una visión sobre la situación y el comportamiento de las clases bajas.

1. Véase D.R.G., «Extremadura», en: *CM* 11.3.1919; un artículo que se queja duramente de las informaciones de la prensa madrileña sobre la región, por considerarlas desde su punto de vista notoriamente difamatorias y negativas.

2. Este era el título de la primera página de *El Socialista*, con el que se daba información de un discurso pronunciado por el diputado socialista Cordero ante las Cortes sobre sus experiencias en un viaje de propaganda por la provincia de Badajoz (*ES* 25.7.1923).

Lo primero que ha llamado la atención es que hay que relativizar en gran medida el cliché del estancamiento de la región durante las cuatro décadas investigadas. La economía regional no permanece en absoluto en la pasividad ni el estancamiento. La crisis finisecular de los años ochenta y noventa del último siglo se manifiesta como una crisis de adaptación, que se supera en el nuevo siglo. La provincia se integra progresivamente en mercados suprarregionales y experimenta un proceso de expansión considerable. Pero esto quiere decir también que se convierte en una víctima de la división nacional del trabajo: los escasos conatos de industrialización, sea en la industria del corcho o en la minería, se muestran como un callejón sin salida. Se confirma el carácter agrícola de la región, aunque no se fortalezca; se producen cereales y carne para mercados de fuera, se contribuye a la lenta subida de los estándares españoles de consumo, que no se llegan a alcanzar, sin embargo, en la propia Badajoz. La mayor parte de la población vive del pan y se preocupa del abastecimiento cotidiano. El telón de fondo de la expansión económica, de los amplios incrementos en la ganadería y en la agricultura cerealista, lo forma una gran expansión de las tierras cultivadas sobre las bases de la agricultura extensiva tradicional, que la refuerza, un *neocarcaísmo* lucrativo para los latifundistas, sin innovaciones tecnológicas o de otro tipo, que se asienta en una oferta excesiva de mano de obra barata.

El crecimiento de la producción —por debajo del cual está incluso el considerable crecimiento de la población— no favorece, sin embargo, a la amplia masa de la población, que representa con su fuerza laboral, sean obreros agrícolas o pequeños arrendatarios, el motor de la expansión que arranca los matorrales que crecen exhuberantemente, limpia de cantos la tierra desnuda, planta olivos y poda encinas, siembra y cosecha el cereal. La superación de la crisis de final de siglo y el despegue siguiente a la recuperación no suavizan los fuertes contrastes sociales, que caracterizan a la región, sino que se aumentan los desniveles sociales. En la ampliación de las dehesas se necesitan muchos pequeños arrendatarios con una yunta de mulos, pero la demanda de parcelas siempre es mayor que

la oferta, a pesar de sus duras condiciones. Los arrendamientos suben amenazadores, puesto que los propietarios, en la coyuntura de la guerra, favorecen la ganadería a costa de los arrendatarios. Los obreros agrícolas siguen luchando, a pesar de la ampliación de los terrenos, con el problema del desempleo estacional que amenaza sus vidas; en el cambio de siglo, el desempleo comporta una caída de los sueldos reales en una situación de mayor apuro, que, con la inflación a partir de 1915 crece hasta lo insoportable.

El progreso se apoya sobre los hombros de las gentes pequeñas, pero, sin embargo, no les beneficia; la desigualdad social se agudiza cada vez más. Faltarán mecanismos para una distribución más igualitaria del rendimiento de las fincas. Las clases bajas continúan viviendo en una situación de estrecha dependencia: como obreros agrícolas dependen de los excesivamente pocos jornales y tienen que adaptarse a un proceso laboral con una subordinación sin posibilidad de resistencia; como arrendatarios están acosados por la competencia por las parcelas, trabajan con una independencia cuestionable y se someten a una rigurosa autoexplotación. No sólo sufren por la falta de recursos y por la dependencia que tienen en sus trabajos y en su producción, sino que además están excluidos ampliamente de los procesos de decisión de la política institucional, incluso en el nivel del pueblo. El sufragio universal tenía en la España del caciquismo una función puramente declaratoria, al menos en las zonas agrarias. El Estado central es débil y endeudado sin remedio; faltan una Administración y una Justicia independientes y eficaces. El objeto prioritario del Estado es el mantenimiento del orden, del orden existente, para lo que se introducen métodos y órganos militares. Amplias capas de la población viven casi desprotegidas en una situación precaria; la mejora de su situación no encuentra ninguna resonancia decisiva como objetivo político.

Los espacios de maniobra de las clases bajas son estrechos, su horizonte está limitado por las carencias y las dependencias. Pero esto no significa, sin embargo, que el proletariado agrario se retraiga hacia la pasividad y la resignación. Reacciona activamente contra

su situación. Dentro de estas reacciones hay estrategias individuales y colectivas, técnicas de buscarse la vida que cuentan incluso con la transgresión de la ley. Pero hay también formas de protesta y resistencia, de peticiones públicas y de negociación, de autoyuda y de castigo, que han sido investigadas en este trabajo bajo la etiqueta de «protesta social».

Estas acciones son, en una parte importante, «política de la calle», con la que va a compensarse la exclusión de las clases bajas de la administración institucional de los asuntos públicos. Sus caracteres se perfilan como formas de una «politique populaire»³: la política de lo cotidiano y de los intereses procedentes de las necesidades básicas como trabajo y subsistencia, la inmediatez de estos intereses y su referencia al entorno próximo, la mayoría de las veces al propio pueblo, así como su justificación desde el sistema tradicional. Con Bohstedt se la podría denominar una forma informal de «social politics»⁴: la protesta pone a prueba la capacidad de influencia y de imposición tanto de los que realizan la protesta como de las autoridades; la protesta afecta a medidas y a esferas de decisión de las autoridades locales así como a la distribución de bienes y cargas sociales; y tiene lugar bajo formas totalmente previsibles y convencionales. La protesta no plantea en principio una cuestión de poder. Es más bien extra que antiinstitucional. La violencia contra las personas o las cosas por parte de los que protestan no es un elemento esencial de las acciones, aunque la violencia desempeñe frecuentemente un papel sangriento en las relaciones cotidianas, sobre todo entre hombres. Su mayor significación la tiene en la protesta contra los impuestos, donde posee un carácter punitivo, pero donde tiene sobre todo una función táctica y expresiva. Si no, las agresiones se manifiestan sobre todo en gestos y en expresiones verbales, con gritos y amenazas. No obstante, los

3. Véase R. Huard, «Existe-t-il une 'politique populaire'?», en: Nicolas (ed.), *Mouvements*, págs. 57-68.

4. Véase Bohstedt, *Riots*, pág. 5 y s. (él, sin embargo, refiere su concepto de «social politics» a una forma específica de protesta: a los «riots»).

manifestantes se mueven con más frecuencia de una manera disciplinada y pacífica. La protesta callejera en Badajoz es directa, sobria. Carece de una dimensión teatral, simbólica, como se conoce de otros lugares y no sólo en las prácticas de protesta tradicionales, «carnavalescas»; se llevan pancartas con la reivindicación de «pan o trabajo» y se va por todo el pueblo gritando «abajo los consumos» o pidiendo un pan mas barato.

La protesta no es garantía de supervivencia, no es un mero comportamiento de emergencia. En las acciones de protesta, en sus objetivos y en sus formas se ve claramente la idea de justicia de las clases bajas que motiva su comportamiento. Los que hacen la protesta no son, en absoluto, una «tabula rasa» ideológica. Representan valores y normas, disponen de una «inherent ideology» tradicional⁵, que contiene las expectativas fundamentales sobre el papel de la política y de la autoridad, y sobre la función de la economía y la propiedad. En esas ideas no se ponen en duda los principios del sistema dominante. Pero subsiste una perspectiva «desde abajo». Las mujeres sobre todo manifiestan en las acciones de protesta, para admiración y extrañeza de algunos observadores de la época, expectativas paternalistas de protección y atención respecto a los representantes del Estado y a los caciques locales. Un paternalismo de esas características corresponde sin duda a las reglas de juego del caciquismo, de un desigual «do ut des», que promete premiar la sumisión y el clientelismo con la concesión de favores personales; caciquismo, sin embargo, reclamado colectivamente por las mujeres que protestan, e incluso posiblemente instrumentalizado.

5. Véase Rudé, *Ideology*, págs. 27-38. Rudé denomina «popular ideology» a las ideas y valores que subyacen a la protesta de la «gente pequeña» —obreros asalariados, campesinos, pequeños consumidores, etc.—. Esa ideología es una mezcla de distintos elementos: de la «mother's milk ideology» inherente a los propios manifestantes, que se alimenta de la propia y directa experiencia, de la tradición oral y de la «folk-memory», y de elementos apropiados «de fuera», ideas o sistemas políticos estructurados; estos dos componentes, según Rudé, no están rígidamente separados entre sí, sino que están en una continua interacción. El concepto de Rudé de «popular ideology» es más amplio y de un nivel de abstracción más elevado que el término de Thompson de «moral economy», que fue formulado para objetivos más limitados.

La economía de mercado no se rechaza básicamente en la protesta; se le reclama más bien una «corrección». Los intereses de las clases bajas son un «precio justo» y la garantía de un abastecimiento de los bienes de primera necesidad. Por eso ocurre que los motines de subsistencias «viejos» se dan precisamente en las zonas más dinámicas con cultivos de cereales para la exportación. En la reivindicación de los antiguos derechos comunales, en los pequeños hurtos de los frutos del campo, en las acciones de los arrendatarios pidiendo el reparto de tierra a los del lugar en vez de a los de fuera, ahí se articula un concepto de propiedad que destaca la función social y comunal de ésta. La protesta tradicional es «localista»: el lugar de la acción y el marco de referencia son el propio pueblo; los protagonistas de las acciones son sectores de las clases bajas del pueblo, que perciben los problemas planteados en la protesta desde una perspectiva local y quieren solucionarlos allí mismo. La «ideología de la leche que han mamado» de las clases bajas apoya y justifica una protesta, muy limitada en cuanto a sus objetivos y su amplitud, de resultados limitados, puntuales la mayoría de las veces.

Decisivo en torno al cambio de siglo es el lento avance de ideologías «extrañas». Ideas republicanas, pero sobre todo socialistas y anarquistas, compiten entre sí y buscan seguidores entre los obreros de la región. Pero incluso en los dirigentes locales y regionales de estas orientaciones no está todavía muy claro el perfil ideológico; el credo político está comparativamente poco diferenciado. De gran significación son las transformaciones en el comportamiento y en la actuación que hacen su aparición en la región con la organización y difusión de nuevas ideologías, pero también en una segunda fase de cambio impulsado por la inflación y la caída de los salarios: las huelgas ponen en el centro de la atención los conflictos de las relaciones laborales bajo nuevas formas. La «lucha obrera» había estado limitada anteriormente a las peticiones de pan o trabajo en las épocas de desempleo. Ahora los objetivos consisten, sobre todo, en una mejora de las condiciones laborales y de los salarios. La nueva manera de defensa de los intereses, sin embargo, trae consigo también otras transformaciones en las relaciones la-

borales: los obreros piden, por vez primera, que la relación laboral se regule como una relación contractual y reclaman actuar frente a los empresarios como una parte negociadora en igualdad de derechos. Las huelgas no aislan en absoluto a los distintos grupos de obreros; las aspiraciones se dirigen a asegurar la fuerza de los huelguistas no sólo dentro del propio ramo sino a buscar también la solidaridad y el apoyo de otros grupos de la «working-class community». Las huelgas rompen el localismo de la protesta tradicional. Los obreros intentan ampliar las negociaciones colectivas del nivel local al regional. Las huelgas encuentran sus límites en su batalla por el control del mercado de trabajo. Los patronos se oponen radicalmente a exigencias como la de que sean las asociaciones obreras quienes tengan el monopolio del empleo; también aquí falta rápidamente un apoyo masivo por parte de las bases. A pesar de estos límites, los obreros logran, al menos temporalmente, ser aceptados por los patronos como interlocutores en la negociación y logran imponer algunas mejoras en los salarios y en las relaciones laborales.

A lo largo de las cuatro décadas investigadas en este libro no se puede observar en Badajoz un desarrollo lineal, por ejemplo desde la protesta callejera a la huelga. No obstante se pueden comprobar algunas transformaciones en los comportamientos conflictivos. En los años de la crisis finisecular domina la protesta contra los consumos. Un cierto papel juegan también las batallas en la retaguardia en torno la privatización de los antiguos derechos de aprovechamiento comunal, que pronto pierden significación, sin embargo, excepto en el caso de Albuquerque. Un fenómeno endémico de las regiones con dehesas continúa siendo el delito masivo de la pequeña delincuencia contra la propiedad como autoayuda en tiempos de necesidad; en esa delincuencia se ponen de manifiesto, precisamente en las épocas de crisis —así todavía en los años entre 1918 y 1920— otras ideas de las clases bajas sobre la propiedad. La protesta contra los impuestos pierde importancia comparativamente después del cambio de siglo, pero no llega a extinguirse nunca totalmente. Los grandes momentos críticos en los que la intensidad de la protesta, atendiendo a su frecuencia, alcanza sus niveles má-

ximos están determinados por la lucha por la subsistencia. Esto vale ya para mayo de 1898, pero especialmente para los años inflacionarios entre 1915 y 1920. En estos años en que los precios suben rápidamente, se elevan los arrendamientos, bajan los salarios y el sistema político cae en una profunda crisis, estallan los conflictos por el pan, el trabajo y los salarios. La huelga «moderna» y la protesta tradicional se solapan, con lo que el movimiento obrero organizado no utiliza las formas «desordenadas» de la protesta popular como plataforma para sus propios objetivos, sino que intenta más bien conseguir el principal objetivo de aquélla —la reducción de los precios de los alimentos básicos encarecidos por la inflación— de forma organizada, disciplinada, con manifestaciones masivas ordenadas, con peticiones y huelgas generales. Quienes menos se dejan llevar a estas nuevas vías ordenadas son las mujeres. Éstas son las que más insisten en las viejas formas. Las mujeres transforman en 1915, para espanto de los socialistas, una manifestación de la Casa del Pueblo en un violento motín de consumos. Las mujeres se lanzan a la calle y a los Ayuntamientos para conseguir una rebaja de los precios en el verano de 1920, cuando se apaga el último gran movimiento huelguístico. Lo «viejo» y lo «nuevo» están especialmente próximos ese año, cuando las huelgas de los obreros son relevadas por los motines de subsistencias de sus mujeres, para disgusto de algunos dirigentes obreros.

Hay que preguntar qué perfil concreto presenta la conflictividad agraria en la sociedad latifundista de Extremadura en torno al cambio de siglo. Si se tiene presente la situación de la Segunda República esbozada al comienzo, llama inmediatamente la atención que el lugar de la lucha, o más exactamente de la protesta manifiesta, no son apenas las dehesas. La batalla abierta por la tierra sólo juega un papel indirecto, sobre todo en las peleas en torno a la privatización de los antiguos derechos de aprovechamiento. En las fincas tiene lugar una pequeña guerra callada por los frutos del campo, que mantiene en jaque a los propietarios, a las autoridades y a las fuerzas del orden. Pero no se produce ninguna ocupación masiva de fincas, como sí realizan los yunteros en los años treinta.

Los pequeños arrendatarios más bien no destacan, a diferencia de los obreros agrícolas, como un grupo propio en los conflictos abiertos. Permanecen en una situación de dependencia respecto a sus arrendadores y dirigen sus energías a la lucha por las parcelas, que en el nuevo siglo es cada vez más dura.

No se manifiesta ninguna añoranza por un reparto de la tierra, por una «nueva desamortización», por un reparto de las grandes fincas entre los que no tenían tierras, que, según Díaz del Moral, constituía desde tiempo inmemorial la quintaesencia de los deseos de las clases bajas agrícolas de Andalucía⁶; la cuestión de la propiedad no se plantea abiertamente en Badajoz bajo las condiciones del régimen político del cambio de siglo, un régimen que demuestra su fuerza sobre todo utilizando su poder militar y policial. La protesta popular en Badajoz no es, en su esencia, de ataque. No lanza un reto para el orden dominante, tampoco es un comportamiento agresivo irreflexivo o suicida. A pesar de ello, sin embargo, la represión por parte del aparato militar de seguridad es con frecuencia implacable, incluso con víctimas mortales.

El escenario de la protesta abierta que se concentra en el objetivo de pan y trabajo es, por lo general, el pueblo. Sus destinatarios no son tanto los propietarios como la autoridad, a quien se le presentan las reivindicaciones y con la que se negocia. Los motines de subsistencias y los motines de consumos tienden a unir a todas las clases bajas de un pueblo, a la gran masa de pequeños consumidores sin medios para vivir de un trabajo agrícola o industrial que proteja sus vidas de las crisis. El objetivo del trabajo puede llevar a la calle a todos los asalariados de un pueblo; el papel dirigente aquí, sin embargo, le corresponde a los obreros agrícolas, dominantes en cuanto al número y afectados por una especial inseguridad en el trabajo.

Una característica esencial de la sociedad latifundista estudiada no es sólo su enorme desigualdad socioeconómica, sino los profun-

6. Véase Díaz del Moral, *Agitaciones*, pág. 199 y otros lugares; véase también Martínez Alier, *Estabilidad*, pág. 53 y ss.

dos desniveles de poder que van asociados a aquélla y las situaciones de dependencia opresiva en las que se encuentran las clases bajas en su trabajo, pero también como miembros de una comunidad. Su campo de acción está muy limitado; una asamblea en la calle representa ya para las fuerzas del orden un motín en potencia. La cuestión de la propiedad es el mayor tabú. Continúa siendo una cuestión de poder. Esto se observa en la reacción de los latifundistas a las manifestaciones de la idea tradicional de propiedad de las clases bajas, que es percibida como una amenaza radical contra el orden de propiedad dominante. Las «ideas antiguas» de las clases bajas agrícolas, tras la que están derechos y prácticas comunales de siglos, resultan subversivas para los propietarios. Esto se muestra en algunas interpretaciones de los pequeños hurtos masivos. Pero se ve de manera especialmente clara en el caso de la lucha por los baldíos de Alburquerque. Se denuncia cómo comunismo la defensa de los derechos antiguos por parte de los pequeños ganaderos y se ataca con toda dureza. Cuando la protesta por un pan barato o contra los impuestos se realiza en la calle, los manifestantes pueden contar entonces con una cierta tolerancia y aceptación por parte de la autoridad y de las fuerzas del orden. Las «nuevas ideas», que comienzan a difundir en la región sobre todo los socialistas y que producen pánico a los gobernantes y a los propietarios, no atacan todavía los pilares del sistema de propiedad; todavía no tienen seguidores masivos. Los obreros agrícolas, no obstante, logran bajo su influencia ser aceptados por los propietarios como interlocutores en las negociaciones sobre salarios y condiciones laborales. En la cuestión de la propiedad, sin embargo, cesan la tolerancia y la receptividad. La cuestión de la propiedad no se planteará abiertamente hasta las nuevas relaciones de poder de la República de 1931: en el conflicto por el poder de disposición sobre la tierra, los obreros agrícolas y los arrendatarios se radicalizan. La polarización y la radicalización de la «cuestión agraria» en la España de los latifundios se convierten en uno de los caminos que conducen directamente a la guerra civil.